

RECURSO DE INCONFORMIDAD

EXPEDIENTE:

IEPC/JE/DEECyPC/RIN/001/2022 Y
ACUMULADO.

RECURRENTES:

A) NEHEMÍAS GARCÍA HERNÁNDEZ Y
OTROS, Y

B) JAIME FLORES PÉREZ.

EXPEDIENTE	DE	ORIGEN:
IEPC/DGJyC/PLS/001/2022		Y
ACUMULADOS	RELATIVO	AL
PROCEDIMIENTO		LABORAL
SANCIONADOR.		

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a diecinueve de abril de dos mil veintitrés.

RESOLUCIÓN que confirma la determinación recaída en el procedimiento laboral sancionador IEPC/DGJyC/PLS/001/2022 Y ACUMULADOS, promovido por diversas trabajadoras y trabajadores de este Instituto Electoral mediante la presentación de quejas en contra del C. Jaime Flores Pérez, Coordinador de Organización Electoral de este Instituto Electoral.

VISTOS; y,

1. RESULTANDO

De las constancias que integran el expediente, se desprende:

1.1. Procedimiento laboral sancionador

1.1.1. Quejas y registro de expedientes. El tres de enero de dos mil veintidós, se recibieron por medio de correo electrónico institucional, los escritos de quejas presentadas por Nehemías García Hernández, Aldo González Zurita, Ma. Bertha Pérez Torres, Marcelo Castro Montesinos y Zeltzin Cantorán González, para instaurar el procedimiento laboral sancionador para casos de hostigamiento y acoso laboral en contra de Jaime Flores Pérez, Coordinador de Organización Electoral de este Instituto Electoral.

Tales quejas fueron registradas bajo el expediente IEPC/PLS/001/2022 y acumulados.

Seguidas las fases conforme al procedimiento, se procedió al dictado de la decisión.

1.1.2. Resolución. El treinta de agosto de dos mil veintidós, la Secretaría Ejecutiva de este Instituto Electoral, dictó la resolución en los términos siguientes:

RESUELVE

PRIMERO. Son inexistentes las infracciones atribuidas al denunciado, por presuntos actos de hostigamiento y/o acoso laboral, en términos del considerando 7.1 de la presente resolución.

SEGUNDO. Son inexistentes las violaciones atribuidas al denunciado, por los actos de hostigamiento laboral precisados en el considerando 7.2 de esta resolución.

TERCERO. Se impone como sanción la suspensión del infractor, sin goce de sueldo y/o salario, por el plazo de treinta días naturales, computado del uno al treinta de septiembre de este año, en términos de lo razonado en el considerando 8 de esta resolución.

CUARTO. Se vincula a la Dirección Ejecutiva de Administración y a la Coordinación de Recursos Humanos, ambas de este Instituto, para que, por su conducto, se realicen las gestiones y trámites administrativos necesarios para cumplimentar lo ordenado en el resolutivo anterior.

QUINTO. En términos de lo razonado en el considerando 9 de esta resolución, **se ordena dar vista a la Contraloría Interna del IEPC Guerrero**, a efecto de que dentro de su esfera de competencia y en uso de sus atribuciones, determine lo que en Derecho corresponda.

1.1.3. Notificaciones. De las constancias que obran en el expediente de origen, se advierte que la resolución impugnada fue notificada a las partes, conforme a lo siguiente:

- a) A los quejosos, el treinta de agosto de dos mil veintidós (fojas 2094 a 2108) y

- b) Al denunciado, el treinta de agosto de dos mil veintidós (fojas 2091 y 2092).

1.2. Recursos de inconformidad

1.2.1. Demanda colectiva. Inconformes con la resolución dictada en el procedimiento laboral sancionador, el quince de septiembre de dos mil veintidós, los CC. Nehemías García Hernández, Aldo González Zurita, Ma. Bertha Pérez Torres, Marcelo Castro Montesinos y Zeltzin Cantorán González, presentaron recurso de inconformidad para controvertir dicha resolución.

1.2.2. Demanda individual. El diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, el C. Jaime Flores Pérez, presentó recurso de inconformidad para controvertir dicha la resolución de quince de septiembre de dos mil veintidós.

1.2.3. Turno. Por auto de veinte de septiembre de dos mil veintidós, dictado por el Encargado de la Dirección General Jurídica y de Consultoría, y atendiendo al riguroso orden alfabético de apellidos del titular de cada una de las Direcciones que integran la Junta Estatal, acordó turnar los recursos de inconformidad a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Organización Electoral.

1.2.4. Solicitud de excusa. Por auto de veintidós de septiembre de dos mil veintidós, se dio cuenta se tuvo por recibido el oficio número 0456 de fecha veinte de septiembre de dos mil veintidós, signado por el Encargado de Despacho de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Organización Electoral, mediante el cual se excusó para elaborar el proyecto de auto de admisión o de desechamiento, y en su caso el proyecto de resolución de fondo que corresponda en ambos recursos de inconformidad, por lo que se ordenó turnar dicha excusa, los recursos y los autos originales al Secretario Ejecutivo de este Instituto para que resolviera el impedimento planteado.

1.2.5. Retorno. El veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, una vez declarada la procedencia de la excusa planteada, el Secretario Ejecutivo de este Instituto Electoral, retornó los recursos de inconformidad y las constancias de autos a la C. Betsabé Francisca López López, Encargada de Despacho de la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Participación

Ciudadana, para el efecto de que elaborara el proyecto de auto de admisión, de desechamiento y, en su caso, el proyecto de resolución de fondo que en derecho corresponda.

1.2.6. Admisión y acumulación. El veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, una vez revisados los sendos recursos de inconformidad, y en virtud de que ambas demandas cumplieron con los requisitos previstos, se decretó la admisión y registro de expedientes.

- a) Al recurso de inconformidad promovido por el C. Nehemías García Hernández y otros, le correspondió el expediente IEPC/JE/DEECyPC/RIN/001/2022, por haberse presentado en primer lugar, y
- b) Al recurso de inconformidad promovido por el C. Jaime Flores Pérez, le correspondió el expediente IEPC/JE/DEECyPC/RIN/002/2022, por haberse presentado con posterioridad a la fecha de la presentación del recurso de los quejosos.

Asimismo, de análisis preliminar, y al estimarse que ambas demandas contienen identidad en la causa, dado que combaten la misma resolución, a efecto de evitar el dictado de resoluciones contradictorias, en el mismo auto admisorio, se decretó la acumulación de los expedientes.

1.2.7. Cierre de instrucción. El nueve de febrero de dos mil veintitrés, al estimarse que los expedientes estaban debidamente integrados, y al no existir cuestión previa alguna que diligenciar ni desahogar, se ordenó el cierre de instrucción, quedando los expedientes listos para formularse el proyecto de resolución.

2. CONSIDERANDO

2.1. Competencia. La Junta Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, es competente para resolver los presentes recursos de inconformidad acumulados, debido a que éstos se interpusieron para controvertir la resolución del Secretario Ejecutivo de este Instituto, de conformidad con el artículo 147 de los Lineamientos para Atender los Casos de Hostigamiento y/o Acoso Laboral y Sexual, el Procedimiento de

Conciliación de Conflictos Laborales, así como para la Sustanciación y Resolución del Procedimiento Laboral Sancionador y el Recurso de Inconformidad para el Personal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero.

2.2. Requisitos de procedencia

2.2.1. Forma. Los recursos de inconformidad fueron presentados por escrito, tal y como lo dispone el artículo 152 de los lineamientos citados, en ellos se señala el órgano al que se dirige, el nombre completo de la y las personas recurrentes, correo electrónico o domicilio para oír y recibir notificaciones; también se señala la resolución que se impugne, así como la fecha en que se recibió la notificación de la resolución o se tuvo conocimiento de la misma.

2.2.2. Oportunidad. Los recursos de inconformidad fueron presentados dentro del plazo de los diez días hábiles posteriores a la notificación de la resolución recurrida, por lo que se les tiene por presentados dichos recursos en tiempo, tal como se explica a continuación:

En efecto, la resolución impugnada le fue notificada a Nehemías García Hernández y demás quejosos, el treinta de septiembre de dos mil veintidós, por lo que entonces el plazo de diez días para controvertirla en términos del artículo 148 de los Lineamientos aplicables, les transcurrió del cinco al diecinueve de septiembre de dos mil veintidós; de ahí que, si la presentación del recurso de inconformidad ocurrió el quince de septiembre del referido año, es evidente su oportunidad.

Por cuanto al recurso de Inconformidad presentado por el C. Jaime Flores Pérez, este fue presentado el diecinueve de septiembre de dos mil veintidós -según se aprecia del sello fechador-, de tal modo que, si la resolución impugnada se le notificó el treinta de septiembre de dos mil veintidós, entonces el plazo de diez días para controvertirla en términos del artículo 148 de los Lineamientos invocados en el párrafo que antecede, le transcurrió del cinco al diecinueve de septiembre de dos mil veintidós; de ahí que, si la demanda se presentó el diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, es incuestionable que su presentación se realizó dentro del plazo previsto en la norma aplicable.

2.2.3. Interés jurídico. Las y los promoventes de los recursos de inconformidad tienen interés jurídico en el presente asunto, debido a que fueron parte en el procedimiento laboral sancionador de origen, por lo que la resolución impugnada que les pudiese causar una afectación personal y directa a los inconformes

2.2.4. Definitividad. El principio de definitividad constriñe a las partes a agotar todas las instancias previas y los medios de defensa legales, antes de promover el medio de impugnación procedente. Este requisito se tiene por colmado, en virtud de que no existe recurso previo al recurso de inconformidad, susceptible de impugnar la resolución controvertida, por lo que su presentación se encuentra ajustada al cumplimiento del principio de definitividad.

2.3. Estudio de fondo

2.3.1. Análisis de los agravios expuestos en el recurso de inconformidad IEPC/JE/DEECyPC/RIN/001/2022 promovido por Nehemías García Hernández y Otros

De una lectura integral de la demanda, en seguida se pasa al análisis de los agravios esgrimidos, por lo que, conforme al método de estudio empleado en esta resolución, no se transcriben los agravios que hacen valer los recurrentes porque la transcripción de los mismos, no constituye un requisito o formalidad, ya que sustancialmente se precisan éstos al momento de realizar su estudio, con independencia de que los recursos de inconformidad obran agregados en los autos de los respectivos expedientes. Por analogía, se considera aplicable la jurisprudencia de rubro: **CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN**¹.

Dicho lo anterior, se realizará una síntesis de los agravios formulados por los actores como en seguida se indica:

I. Inconformidad formulada por la C. Zeltzin Cantorán González

¹ Jurisprudencia 2a./J. 58/2010, Registro digital: 164618, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXXI, Mayo de 2010, página 830, Novena Época

Según se observa, los motivos de inconformidad están encaminados a controvertir los resolutivos primero, tercero y quinto de la resolución recurrida. En el punto 1 de sus argumentos, refiere que la autoridad resolutora del procedimiento laboral sancionador, al realizar el análisis consideró que *no genera convicción* sobre los señalamientos que le fueron planteados. No obstante, ella señala que, de conformidad con los lineamientos, la autoridad responsable tiene facultades de investigación, por lo que debió allegarse de los puntos de hecho y no valorarlos subjetivamente, así como los medios de prueba que no se hubieran ofrecido en el procedimiento laboral.

En el punto 2, señala que la autoridad responsable, al tener facultades de investigación, resulta inadmisibles arrojarle la carga de la prueba porque se trata de un hecho ilícito. En su concepto, la queja presentada conllevó a un procedimiento de orden social. En ese sentido, resalta que, al resolver, la autoridad debió aplicar los protocolos para juzgar con perspectiva de género; que para tal efecto señala la jurisprudencia 2006870 de la SCJN Suprema Corte de Justicia de la Nación (tesis CCLII/2014 (10ª).

En el punto 3, cuestiona que la autoridad responsable, haya sostenido que no adquiere relevancia jurídica porque son motivo de investigación las conductas, pero cuestiona por qué la autoridad señaló el que no se aportaron más medios de prueba.

En el punto 4, hace el señalamiento de que, en el resolutivo quinto de la resolución, resulta violatorio de los derechos fundamentales en razón de que se le *revictimiza* en términos del artículo 5 de los lineamientos.

En concepto de esta Junta Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, los motivos de inconformidad, sintetizados, son infundados en una parte e inoperantes en otra, como en seguida se justifica:

Respecto al punto 1, se considera que no le asiste la razón porque la recurrente parte de apreciaciones inexactas, al señalar que la autoridad responsable tiene facultades de investigación, y que, debido a ello, debió

allegarse de los puntos de hecho a fin de evitar su valoración subjetiva; de igual manera, se sostiene que es erróneo señalar que la autoridad resolutora debió allegarse de los medios de prueba que no se ofrecieron en el procedimiento laboral.

Ciertamente, los Lineamientos para Atender los Casos de Hostigamiento y/o Acoso Laboral y Sexual, el Procedimiento de Conciliación de Conflictos Laborales, así como para la Sustanciación y Resolución del Procedimiento Laboral Sancionador y el Recurso de Inconformidad para el Personal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, prevén una etapa de investigación en los artículos 88 al 91, en la cual, dicha norma establece los supuestos para recabar la información que se utilizará, precisamente en la etapa de investigación dentro del procedimiento laboral.

Atribuciones que, la autoridad resolutora ejerció a efecto de requerir en múltiples ocasiones, la información que fue utilizada para dictar la decisión que ahora se cuestiona.

Así, obran en las constancias del expediente IEPC/DGJyC/PLS/001/2022 y acumulados, los requerimientos que la autoridad instructora realizó con el objeto de recabar la información correspondiente.

De lo anterior, se advierte que, la autoridad realizó bajo motivos justificados, la investigación atinente que le sirvió en la etapa de investigación y que, de ello, le fue de utilidad también para sustentar la resolución que dirimió la controversia fijada.

Sobre este punto, se considera necesario puntualizar que la información que se requiera en la etapa de investigación y que en uso de sus facultades la autoridad instructora deba recabar, de ningún modo exime al denunciante de aportar las pruebas necesarias a efecto de acreditar fehacientemente sus afirmaciones contenidas en los hechos en los cuales se sustenta su queja.

Esta Junta Estatal considera que, por analogía, es aplicable la jurisprudencia 12/2012 de rubro: **CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE.**

De esta manera, se considera que lo puntualizado en el párrafo anterior, es acorde al modelo de impartición de justicia; sobre todo porque, tratándose de situaciones punitivas, la obligación de probar la conducta presumiblemente infractora del denunciado le corresponde al quejoso o denunciante, con independencia de la facultad investigadora de la autoridad que instruyó el procedimiento.

Así, en el presente caso, está demostrado en constancias del expediente que la autoridad resolutora del procedimiento laboral sancionador, actuó ajustándose a los lineamientos mencionados, sin que tal circunstancia implique suponer -erróneamente-, como lo sostiene la denunciante, que los lineamientos la obliguen a recabar en investigación todos los señalamientos de la denuncia, sobre todo en aquellos en los que se pretende acreditar la responsabilidad personal, puesto que de conformidad con el principio de presunción de inocencia, tal deber es responsabilidad de quien denuncia.

En suma, se sostiene que no es posible acceder a su planteamiento, ya que, sobre este punto, la denunciante aprecia sin razón alguna que, al no ejercerse la facultad investigadora, tal y como ella lo supone en el sentido de que la autoridad debió allegarse de los puntos de hecho y de los medios de prueba que no se hubieron ofrecido en el procedimiento laboral, debido a que, primeramente, se encuentra acreditada la intervención de la autoridad en la etapa de investigación; asimismo, como se ha sostenido, los medios de prueba que no fueron aportados por la denunciante, en modo alguno no implican una carga para la autoridad de estar recabando tal información, puesto que eso provocaría un absurdo de enderezar todas las deficiencias en el procedimiento a favor de la denunciante, lo que rompería con el principio de imparcialidad.

En lo que respecta al señalamiento, del cual sostiene que el resolutor juzgó sin aplicar los protocolos para juzgar con perspectiva de género, y en el que,

señala también que se inobservó la jurisprudencia 2006870 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (tesis CCLII/2014 (10ª), de igual manera, resultan infundados.

Sobre este punto debe señalarse que, contrariamente a lo señalado por la recurrente, en el procedimiento laboral sancionador, se tomaron en cuenta diversas medidas a efecto de emplear una justicia basada en una perspectiva de género. Así, de las constancias que integran el expediente se advierte que, la autoridad instructora se avocó a realizar diversos requerimientos con el objeto de obtener la información necesaria que le permitiera llegar a la verdad de los hechos para emitir una decisión acorde a la realidad. Asimismo, de lo que se advierte en el expediente, es que la autoridad resolutora, en su actuar, tomó diversos elementos en la controversia que le permitieron juzgar eliminando todo obstáculo que pudiera ocasionarle un perjuicio, dado su condición frente al denunciado.

Al respecto, se estima que, la resolución controvertida cumple con la jurisprudencia con número 1a./J.22/2016 (10a.) de rubro: **ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO**, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, abril de 2016, tomo II, página 836.

De ahí, lo infundado de sus argumentos.

Finalmente, por cuanto hace a lo señalado en el punto 4 sintetizado, se considera que este argumento deviene inoperante, puesto que el señalamiento que hace, en el sentido de que se le *revictimiza*, no se encuentra encaminado a combatir las consideraciones en las que se sustenta la resolución impugnada. Contrariamente a la postura que asume la recurrente, debe decirse que los argumentos que vierte en este punto, sustancialmente se basan en hacer señalamientos que no combaten las consideraciones que el resolutor plasmó en la decisión, dado que no expone cuáles son las razones o circunstancias de hecho en que se basó la autoridad para ocasionarle una revictimización.

Luego, se estima que, lo que se desprende de sus argumentos, son meras afirmaciones subjetivas que no combaten la razón esencial de la decisión, lo que, desde luego, no alcanza a evidenciar cómo es que la decisión emitida le causa una *revictimización*. Al respecto, se considera la aplicación de la jurisprudencia identificada con la tesis: 1a./J. 85/2008 de rubro: **AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS QUE SÓLO PROFUNDIZAN O ABUNDAN EN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, SIN COMBATIR LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA.** De ahí que se considere que sus argumentos resulten inoperantes.

II. Inconformidad formulada por el C. Nehemías García Hernández

Según se observa, los motivos de inconformidad están encaminados a controvertir los resolutivos: primero, tercero y quinto.

En primer lugar, cuestiona el considerando 7.1.4 en el que se abordó el tema respecto a que él señaló que, el denunciado le asignó de manera autoritaria la elaboración de tablas de los resultados electorales del PEO 2017-2018 del SPEN OPL y que de acuerdo al catálogo de cargos y puestos del SPEN sistema OPL, la actividad era de su competencia. Se queja que, para el desarrollo de dicho trabajo, él requería apoyo en el tema de resoluciones jurisdiccionales.

Señala que, al presentarse un error, el infractor “se lavó las manos” y le envió una tarjeta informativa a la cual le respondió con oportunidad en el sentido de que el error fue por la negligencia del denunciado al no validar o revisar la información o, en su caso, delegar a la Jefatura de Área, lo cual a su juicio constituyó una difamación a su persona, y señala que su asunto fue ventilado en el Instituto y que existía un procedimiento administrativo en su contra., Señala y que eso menoscabó su imagen personal y generó un daño moral.

Asimismo, que la responsable no investigó el acoso laboral con el que el denunciado designó la meta, por lo que no se concretó a analizar el acuerdo para saber quién o quiénes pueden realizar dicha meta, sin que se haya

percatado que es una meta en conjunto, por lo que sostiene que su análisis no fue objetivo al investigar la conducta del denunciado.

Refiere el denunciante que, el acoso laboral que cometió el denunciado en su contra, lo fue en el trato hostil al realizarle comentarios y dirigirse a él en forma denostativa, por lo que existía un procedimiento administrativo en su contra. Derivado de ello, el recurrente señala que, esa fue la conducta a investigar por parte de la autoridad sustanciadora.

Señala que, el resolutor refiere que no fueron controvertidas las documentales que los anexos 37 y 38 de los correos electrónicos 16 y 19 de julio de 2021.

En el punto 2 de sus agravios, señala los siguientes puntos:

- La tarea de recibir y sellar oficios remitidos por otras áreas, situación que le causó incomodidad y fue denigrante, ya que en la COE existe personal administrativo que están por debajo de su cargo.
- En este mismo punto señala que, la responsabilidad que le asignaron del archivo general de la COE le resulta humillante e incómoda; añade que tal designación se ve reflejada en su rendimiento laboral y en un ambiente en el cual, él no es libre en su relación como subordinado con el denunciado, y que no se le debió arrojar la carga de la prueba en el procedimiento laboral, pues la investigación de tales hechos es una facultad de *comisión instructora* y del Secretario Ejecutivo del IEPC, quien además debió brindarle atención psicológica, debido a su carácter de víctima.

En el punto 3, refiere que el denunciado le comunicó mediante tarjetas informativas que se abstuviera de estudiar su programa de formación del SPEN-OPL dentro del horario laboral, y que se ajustara a los 30 minutos para tomar alimentos. Sobre este tema, señala que el resolutor debió indagar sobre la tarjeta, y no solamente sobre la documental del denunciado en el

anexo 44. Además, puntualiza que el resolutor no debió ser tan técnico con argumentos que van más allá de los que él denunció en sus hechos.

En el punto 4, señala que el denunciado lo excluyó de las actividades a participar en comisiones oficiales, porque el mismo denunciado dijo que prefería solicitar apoyo a otras áreas para actividades de la COE; de esta situación se queja atenta contra su dignidad, debido al trato hostil y denostativo. Sin embargo, señala que el resolutor no valoró correctamente las constancias remitidas por la Coordinadora de Recursos Humanos en su informe, en el que refirió que él sí tuvo comisiones a diversos municipios (se señalan dichos municipios).

En este punto, también señala que el resolutor debió investigar desde la perspectiva *iura novit curia* el trato hostil y denostativo que recibió del denunciado, no así de lo que informó la Coordinadora de Recursos Humanos, al desvirtuar las pruebas de instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana. Señala que, con ello, el resolutor violentó la progresividad de los derechos humanos al transgredir los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En el punto 5, expone que en lo referente a que el denunciado le negó permisos y justificaciones de asistencias y retardos, porque solamente le firmaría justificaciones con recetas médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, lo que en su concepto violentó el derecho humano a la salud, que en su momento le resultaron varios descuentos; aunado a ello, le afectó su estado emocional. En ese sentido, señala que no se le debió arrojar la carga de la prueba, dado el hostigamiento laboral del que fue objeto, sino que el resolutor debió investigar oficiosamente con base en lo dispuesto en el artículo 88 de los lineamientos en la etapa de investigación.

En el punto 6, hace un señalamiento en el que, en la consideración respectiva, el denunciado ya no apoyó en las actividades donde era necesaria su participación, revisión u orientación, ya que se la pasaba hablando por teléfono, y que señaló expresamente: “mi función es ejecutiva, yo solo coordino”. En su concepto, señala que el resolutor expuso que fue genérico en la exposición de sus hechos. Además, vuelve a reiterar que el denunciado

tiene la estructura del IEPC Guerrero. Sin embargo, aduce que el resolutor no realizó la investigación, y solo se dedicó a manifestar que no ofertó medio de prueba para acreditar sus manifestaciones.

En el punto 7, señala que el resolutor en sus consideraciones, al abordar los temas de hostigamiento y autoritarismo del denunciado, la asignación y de la elaboración de las tablas de los resultados del proceso electoral ordinario 2020-2021, y que el denunciado eludió dicha actividad pese a que fue una meta individual de la COE.

En el punto 8, señala que el resolutor desatendió los principios del principio laboral sancionador.

Los argumentos formulados devienen inoperantes, como en seguida se expone:

Como se observa, de los argumentos formulados por el recurrente, se advierte una exposición de razones que lejos de combatir la decisión del resolutor, se encuentran encaminadas a cuestionar aspectos que no fueron considerados en la resolución recurrida. Así, de la síntesis se advierte que, la intención del recurrente es que esta Junta Estatal tome conocimiento de diversos acontecimientos que, en su concepto, le perjudicaron; tal es el caso de que el denunciado le asignó de manera autoritaria la elaboración de tablas de los resultados electorales del PEO 2017-2018 del SPEN OPL, y que, además se advierte que con independencia de que tal actividad era responsabilidad del denunciado, el recurrente necesitaba apoyo para el caso de resoluciones jurisdiccionales.

Empero, de lo anterior, no se desprenden razones que combatan la decisión del resolutor o por qué, los argumentos en que se sustenta la decisión cuestionada, se apartan de la aplicación correcta del Derecho.

Tampoco se observa, en los argumentos del recurrente, en los que hace un señalamiento claro de que el *infractor* “se lavó las manos”; de ahí que señale

que, el envío de una tarjeta informativa le haya responsabilizado los errores que fueron producto de la negligencia del denunciado porque no revisó la información.

A este respecto, se sostiene que, estas razones en nada controvierten la argumentación del resolutor, pues tales señalamientos no ponen en evidencia que el resolutor haya aplicado indebidamente la normativa aplicable. Sin embargo, de la lectura de la queja y de los agravios expuestos por el recurrente en la inconformidad, se aprecia que estas expresiones fueron planteadas en la queja del procedimiento laboral de origen (foja 160 del expediente), por lo cual, se desprende una reproducción de señalamientos que se hicieron en la instancia del procedimiento laboral y que, en el recurso de inconformidad se retoman y reproducen casi de manera literal, sin que contengan elementos que ataquen las consideraciones torales de la resolución impugnada.

Por el contrario, el recurrente se centra en volver a manifestar diversos señalamientos que puntualizó en la queja primigenia. A tal efecto, se estima aplicable por identidad de razón, la jurisprudencia con registro digital 169974, de rubro: **AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS QUE REPRODUCEN, CASI LITERALMENTE, LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, SIN CONTROVERTIR LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA "RECURRIDA"**, ya que, conforme a dicho criterio, la inoperancia se actualiza cuando sólo reproducen, casi literalmente, los conceptos de violación expuestos en la demanda de amparo y respecto de los cuales se hizo pronunciamiento en la sentencia recurrida, pues no controvierten los argumentos jurídicos sustentados por el resolutor.

En el caso específico, acontece similar circunstancia, pues como ya se expuso, el recurrente reprodujo casi literal, lo señalado en la queja primigenia., de ahí, la inoperancia de su inconformidad.

De igual manera, por cuanto hace al señalamiento sobre el tema del acoso laboral, se estima que este argumento también es inoperante, debido a que ello representa una cuestión que se dilucidó en el procedimiento laboral sancionador. De tal forma que, como ya se mencionó, el recurrente debió

combatir las razones que sobre este punto consideró el resolutor, resaltando por qué sostienen que éste se apartó de la correcta aplicación del Derecho.

De ahí que, se estime que los argumentos son inoperantes.

De igual manera, por cuanto hace a los argumentos que expone en el punto 2, los mismos devienen inoperantes.

Como se señaló en la jurisprudencia de rubro: **AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS QUE REPRODUCEN, CASI LITERALMENTE, LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, SIN CONTROVERTIR LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA "RECURRIDA"**, ya que, conforme a dicho criterio, la inoperancia se actualiza cuando sólo reproducen, casi literalmente, los conceptos de violación expuestos en la demanda de amparo y respecto de los cuales se hizo pronunciamiento en la sentencia recurrida, pues no controvierten los argumentos jurídicos sustentados por el órgano jurisdiccional.

En este caso, se estima que tal circunstancia acontece, puesto que, de los argumentos ahí esgrimidos, se advierte que el recurrente se concreta en repetir aspectos que fueron planteados en el procedimiento laboral sancionador. No obstante, en esta instancia debió aportar razones jurídicas que pongan en evidencia por qué estima que la resolución impugnada transgredió la normatividad aplicable.

No sobra decir que, respecto del punto específico que resalta en el sentido de que no se le debió arrojar la carga de la prueba en el procedimiento laboral, dado su relación como subordinado del denunciado, y que la facultad de investigar corresponde a la *comisión instructora* y del Secretario Ejecutivo del IEPC.

Lo señalado resulta infundado, puesto que, contrariamente a sus afirmaciones, esta Junta Estatal sostiene el argumento de que, en el procedimiento laboral, la carga de la prueba corresponde al denunciante o

quejoso. Se estima aplicable, por identidad de razón, la jurisprudencia 12/2012 de rubro: **CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE**; ello con independencia de que la autoridad sustanciadora deba realizar actos de investigación para dictar la resolución que conforme a derecho corresponda.

Con relación al punto 3, en el que se destaca el argumento de que el resolutor debió indagar sobre la tarjeta, pues en esta, el denunciado le comunicó al ahora recurrente que se abstuviera de estudiar su programa de formación del SPEN-OPL.

Al respecto, este argumento se declara inoperante, puesto que el señalamiento que refiere el recurrente no es suficiente para combatir la resolución impugnada. El tema que versa sobre el contenido de dicha tarjeta, se debió combatir partiendo de la base del sentido en que fue valorada por el resolutor o sobre la trascendencia de dicho documento al dictarse la resolución.

Con relación al punto 4, en el sentido de que el resolutor no valoró correctamente las constancias remitidas por la Coordinadora de Recursos Humanos, y que el resolutor debió investigar desde la perspectiva *iura novit curia* el trato hostil y denostativo que recibió del denunciado. A este respecto, los argumentos aquí referidos son inoperantes, puesto que el recurrente no aporta mayores elementos que permitan dilucidar el punto de controversia, pues la afirmación de que no se valoraron tales constancias que remitió la Coordinación de Recursos Humanos, no permite contar con mayores elementos de los que, esta autoridad al pronunciarse en el caso concreto, la resolución impugnada se dictó conforme a Derecho.

Por cuanto hace al punto 5, los señalamientos se estiman infundados. En este punto el recurrente se duele de que, se le arrojó indebidamente la carga de la prueba, puesto que el hostigamiento laboral del que fue objeto, el resolutor debió investigarlo oficiosamente. Señala la violación a su derecho humano a la salud porque se le prohibió presentar recetas diversas a las expedidas por el Instituto Mexicano del Seguro Social.

A tal efecto, se estima que no le asiste la razón al inconformarse porque no se le debió eximir de la carga de la prueba como él lo aduce, aún y cuando alegue la transgresión a su derecho humano a la salud.

Como se ha sostenido en esta resolución, se estima que, con independencia de la investigación que haga la autoridad resolutora, la carga de la prueba ante los señalamientos realizados debió fijársele al ahorra recurrente. Esta Junta Estatal considera que, por analogía, es aplicable la jurisprudencia 12/2012 de rubro: **CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE.**

De ahí lo infundado de sus argumentos.

Finalmente, por cuanto hace a los puntos 6, 7 y 8, se estiman inoperantes los argumentos esgrimidos.

En efecto, la inoperancia de los agravios se actualiza, entre otros supuestos, cuando al exponer los agravios de estos se advierte que los planteamientos, no se encuentran encaminados a combatir la resolución impugnada, o en su defecto, cuando las razones que integran la totalidad de los argumentos no son propiamente agravios para controvertir los argumentos en los que se sustenta la resolución.

En este caso, se desprenden señalamientos que, lejos de fundarse en argumentos que ataquen a la resolución impugnada, se centran en reproducir circunstancias que acontecieron en el procedimiento laboral sancionador sin que aporten elementos de controversia con el objeto de que se analicen para dilucidar si el resolutor del procedimiento laboral aplicó debidamente el Derecho.

Por ello, esta Junta Estatal sostiene que, las razones que se exponen no combaten propiamente la decisión adoptada en la resolución que se cuestiona. De ahí que se sostenga, que tales argumentos son inoperantes.

III. Inconformidad formulada por la C. Ma. Bertha Torres Pérez

En sus agravios, aduce los resolutivos: primero, tercero y quinto, y señala los preceptos legales violados, 1, 4, 14, 16, 17 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con relación a los artículos 4, 5, 6, 36 inciso a), 88, 89 incisos a), b), c) y d), 92 de los lineamientos.

En el punto 1, se queja de que en el considerando 7.1.5 del hecho 1, se analiza en forma indebida en el sentido de que no existe medio de prueba, lo cual, en su concepto, resulta inverosímil, puesto que no realizó una investigación exhaustiva a la denuncia.

En el punto 2, que existió una mala apreciación del resolutor al omitir el estudio completo de los hechos, y que por esa causa solicita que en segunda instancia se debe precisar lo real, sin que se deba incurrir en el error judicial.

En el punto 3, señala que el denunciado se la pasa realizando tarjetas informativas, y que, con base en ello, el resolutor debió de allegarse de los medios objetivos para ser exhaustivo, ya que debió investigar la conducta del denunciado bajo el principio del debido proceso en igualdad procesal, tal y como lo disponen los lineamientos.

En el punto 4, a su decir, el denunciado le ha asignado actividades que él tiene asignadas en la elaboración de metas del servicio profesional, y que el interrogatorio de Nehemías García Hernández, debió examinarlo directamente en la etapa de investigación y poder determinar con mayor claridad ese hecho. Señala que tal circunstancia, le genera una violación sistemática a sus derechos fundamentales.

En el punto 5, señala que el resolutor debió realizar el examen directo al testigo, de los hechos que se investigan.

En el punto 6, señala que el denunciado participó en el concurso público abierto para elegir al Consejero Presidente del IEPC, y que, derivado de ello, el trato hacia ella por parte del denunciado fue hostil y que esto no fue corroborado por la instancia instructora.

En el punto 7, se queja de que el denunciado llega muy tarde, y que de manera déspota le ha señalado que ella tiene un cargo de Jefatura.

En el punto 8, señala que es el último *genérico* que se resuelve, que es el efecto del hostigamiento y acoso laboral. Señala que, si bien existe el informe de la Coordinadora de Recursos Humanos, y que señala que es ahí donde se ve el efecto del daño psicológico que fue la consecuencia del daño generado hacia ella.

Calificación de la conducta y determinación de la sanción a imponer

Se señala que la sanción que se le impuso al denunciado es desproporcional, puesto que en la fracción VII del artículo 141 de los lineamientos, el término medio para imponer va de 1 a 60 días, se queja de que el resolutor consideró aplicar la media que es de 30 días, lo que, en su concepto, resulta inaplicable al caso particular ya que el denunciado realizó una conducta muy grave. Señala que la sanción ameritaba la rescisión del contrato del denunciado, además de que se le deben impartir talleres en materia de derechos humanos.

Se queja de que el resolutor no consideró que la conducta del denunciado puede ser reiterada, por lo que existe la posibilidad de realizar de nueva cuenta actos de acoso laboral.

Solicitud de la improcedencia del considerando 9 con relación al considerando quinto.

En este apartado, se señala que la litis del procedimiento laboral sancionador, se sujeta a conducta del denunciado, no a las manifestaciones de este mismo en su contestación de demanda, lo que, en su concepto, resulta improcedente. Señala que, al aplicar en su contra las vertientes del denunciado, estarían en un contexto de revictimización.

Una interpretación incorrecta del resolutor, ya que transgredió los principios de los artículos 1, 4, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo las premisas de una máxima protección al justiciable, porque no pueden desprenderse dos premisas facticos en un hecho de hostigamiento y/o acoso laboral.

Los agravios señalados en su síntesis, se estiman inoperantes en una parte e infundados en otra, de conformidad con lo siguiente:

En los argumentos, sintetizados, en el punto 1, se estiman infundados, debido a que contrariamente a lo señalado por la recurrente, en la instrucción del procedimiento laboral sancionador de origen, se llevaron múltiples requerimientos con el objeto de obtener información a efecto de resolver las cuestiones planteadas en las denuncias. Ello con independencia de que, en el caso específico, como denunciante también tenía la carga de probar sus afirmaciones. Al igual que, en diversas respuestas a los argumentos vertidos, al caso concreto, se estima aplicable la jurisprudencia 12/2012 de rubro: **CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE**; con independencia de que la autoridad sustanciadora, como se ha sostenido en este recurso de inconformidad, deba realizar actos de investigación. Por lo cual, se considera que en la resolución que se dictó en el procedimiento laboral, se haya estimado que, para casos específicos, la ausencia de prueba de parte de los denunciantes haya provocado que no se acreditaran, sin embargo, dicha circunstancia, no es válida para sostener que la autoridad sustanciadora no llevó a cabo una investigación exhaustiva.

De ahí que, no le asiste la razón en su planteamiento, y por ello, las razones devienen infundadas.

De igual manera, se estiman infundados y también inoperantes los argumentos vertidos en el punto 2, porque contrariamente a lo señalado por la recurrente, la autoridad resolutora sí procedió al estudio completo de las denuncias, y además de ello realizó actos de investigación con el objeto de llegar a la verdad de los hechos para dictar una resolución que tomara en cuenta todo lo acontecido en la instrucción.

Por tanto, no es factible sostener -como lo hace la recurrente-, que ello provocó una mala apreciación del resolutor. De ahí que se estimen, lo inoperante e infundado de sus agravios.

Por cuanto hace al punto 3, se estima que los argumentos son inoperantes, ya que de ellos se desprende que la recurrente no controvierte consideraciones de la resolución impugnada, sino que se limita a señalar aspectos que atribuye al denunciado en el sentido de que se *la pasaba realizando tarjetas informativas*; no obstante que señala que, el resolutor debió de allegarse de los medios objetivos para ser exhaustivo, puesto que debió investigar la conducta del denunciado bajo el principio del debido proceso en igualdad procesal; de tales expresiones, no se aprecia cuáles son las consideraciones de la resolución que controvierte, sino más bien, señala que el resolutor debió ser objetivo para lograr la exhaustividad. Sin embargo, tales expresiones, aun con la suplencia de la queja deficiente, no es posible identificar cuáles son las razones claras que expone para desvirtuar la decisión de la autoridad resolutora o por qué considera que la falta de exhaustividad, pese a los actos de investigación realizados, le genera una cuestión que le cause perjuicio a sus intereses. Es por ello que, se considera que no le asiste la razón a la recurrente.

Finalmente, por cuanto hace a los argumentos sintetizados en los puntos 5, 6, 7 y 8, se estiman inoperantes porque no se encuentran encaminados a combatir las razones de la resolución impugnada. Contrariamente a ello, los señalamientos que formula, los encamina a desvirtuar aspectos que debieron dirimirse en el procedimiento laboral sancionador, pero que además fijan una controversia diversa y ajena a la litis que se resolvió en el procedimiento laboral.

Así, se considera que la actitud del denunciado que le atribuye en el punto 7 en el sentido de que la trata con una conducta calificada como “déspota”, así como lo señalado en el punto 6, en el que puntualiza que el denunciado participó en el concurso público abierto para elegir al Consejero Presidente del IEPC, y que, derivado de ello, el trato hacia ella por parte del denunciado fue hostil y que esto no fue corroborado por la instancia instructora.

De igual forma, por cuanto hace al daño psicológico que advierte en el punto 8, y lo mencionado en el punto 5, relativo a que debió realizar un examen directo al testigo.

De ahí que se sostenga que, esta Junta Estatal observa, que los puntos en los cuales propone su controversia no son parte del análisis que se debe realizar al estudiar la resolución del procedimiento laboral sancionador.

Se estima que, por identidad de razón, apoya lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 85/2008, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: **AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS QUE SÓLO PROFUNDIZAN O ABUNDAN EN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, SIN COMBATIR LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA**; ello, en virtud de que, conforme a este criterio jurisdiccional, debe entenderse que la inoperancia, se justifica cuando el inconforme realiza una repetición o abundamiento en sus argumentos, pero no combate las consideraciones de la sentencia recurrida.

De igual manera, se estima aplicable, por identidad de razón, la jurisprudencia 2a./J. 109/2009, sustentada por la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro: **AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS QUE REITERAN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, ABUNDAN SOBRE ELLOS O LOS COMPLEMENTAN, SIN COMBATIR LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA.**

Por estas razones, se insiste, en que los argumentos son inoperantes.

IV. Sobreseimiento

Se considera oportuno señalar que, como se advierte del escrito de recurso de inconformidad que se analiza en este apartado, éste se encuentra suscrito también por los CC. Aldo González Zurita y Marcelo Castro Montesinos. Sin embargo, de la demanda que consta en 11 páginas de fecha quince de septiembre de dos mil veintidós, se observa que éstos, no formularon agravios, por lo que se señala esta circunstancia para los efectos conducentes.

Ahora bien, derivado de lo anterior debe señalarse que la formulación de agravios produce la fijación de la controversia en contra del acto impugnado, que permite a la autoridad que conoce del asunto realizar el análisis que le permita y emitir una decisión sobre los puntos en controversia.

Sin embargo, en el caso que nos ocupa, al no haberse formulado agravios ni desprenderse la causa de pedir de los CC. Aldo González Zurita y Marcelo Castro Montesinos, no existe materia de análisis, lo que imposibilita emitir pronunciamiento en torno a dichos inconformes. Por ello, al no existir materia de estudio, lo correspondiente conforme a Derecho es sobreseer en el recurso de inconformidad, presentado por Aldo González Zurita y Marcelo Castro Montesinos, dada la ausencia de agravios.

Sirve de asidero a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 81/2002, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:

“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO. El hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben

plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente el porqué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. Lo anterior se corrobora con el criterio sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse.

2.3.2. Análisis de los agravios expuestos en el recurso de inconformidad IEPC/JE/DEECyPC/RIN/002/2022, interpuesto por el C. Jaime Flores Pérez

De una lectura integral de la demanda, en seguida se pasa al análisis de los agravios formulados, por lo que, conforme al método de estudio empleado en esta resolución, no se transcriben los agravios que hace valer el recurrente porque la transcripción no constituye una formalidad, ya que sustancialmente se precisan éstos al momento de realizar su estudio, con independencia de que el recurso de inconformidad obra agregado a los autos de los respectivos expedientes. De igual manera, por analogía, se considera aplicable la jurisprudencia de rubro: **CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN².**

Asimismo, se resalta que se analizan en el orden en que fueron formulados. De esta manera, en síntesis, se advierte:

Agravio primero. Se duele de la declaración de improcedencia respecto del incidente de objeción y tacha de testigos, en el que específicamente señaló que no era correcto que los actores se ofrecieran como testigos entre ellos (expone que, según lo narrado por ellos, los hechos ocurrieron en presencia

² Jurisprudencia 2a./J. 58/2010, Registro digital: 164618, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXXI, Mayo de 2010, página 830, Novena Época

del demás personal de la Coordinación de Organización Electoral, y otras coordinaciones).

En adición a ello, señala que la testigo Diana fajardo Zaragoza, ofrecida por Bertha Pérez Torres, mantienen una amistad incondicional y de complicidad, entre ellas.

Sostiene que, los testigos al ser parte del mismo (los que suscriben la queja), sus testimonios no garantizan la imparcialidad y veracidad), y que la responsable no consideró necesario corroborar tales testimonios.

Se queja de que la autoridad responsable realizó un análisis parcial y falto de exhaustividad para determinar el valor probatorio de las declaraciones, ya que el ateste debe señalar si tiene o no interés en el asunto.

El agravio es infundado; en seguida se explica:

En principio debe señalarse que, por cuanto hace a las razones que expone, no le asiste la razón al recurrente cuando cuestiona la determinación del resolutor en la que desestimó el incidente de tacha de testigos que promovió en el procedimiento laboral sancionador de origen.

Ello es así, dado que, en concepto de esta Junta Estatal el recurrente parte de apreciaciones erróneas al controvertir la decisión impugnada, puesto que señala el hecho de que los denunciante o quejosos fueron ofrecidos para ser testigos en el mismo procedimiento que se le instruyó, y que además de ello, existió una ateste que mantiene “amistad incondicional y de complicidad” con una de las denunciadas. Estos son los argumentos con los que parte para concluir que no se debió admitir la prueba testimonial.

Ahora bien, para justificar la calificación de este agravio, es conveniente mencionar que, en la resolución impugnada, la autoridad tomó la decisión correcta al declarar infundado el incidente. En este sentido, se recalca que el hecho de ofrecer como prueba testimonial a personas que fueron parte denunciante en el procedimiento laboral no vició la naturaleza de la prueba con la que se intentó probar hechos atribuidos al denunciado, como el recurrente erróneamente lo señala.

Al respecto, cobran especial relevancia, además de las tesis jurisprudenciales citadas que apoyaron la decisión cuestionada, las tesis siguientes:

- a) **TESTIGOS, TACHA DE LOS, SU PROCEDENCIA, NO EXIME A LA JUNTA DE ANALIZAR EL CONTENIDO DE SUS DECLARACIONES³, y**
- b) **TESTIGOS EN EL JUICIO LABORAL. LA SOLA CIRCUNSTANCIA DE QUE SEAN PARIENTES DEL OFERENTE NO ES SUFICIENTE PARA NEGAR VALOR A SUS DECLARACIONES⁴.**

Lo anterior, debido a que, como se señala en la tesis indicada en el inciso a) arriba mencionada -la cual se considera aplicable por identidad de razón-, al abordar el tema de las tachas de testigos, las cuales, según el texto de dicho criterio jurisprudencial, se refieren a circunstancias de índole personal que concurren en los testigos, si bien trae aparejada una presunción de parcialidad, esto no significa que, por ese hecho, lo manifestado carezca de todo valor jurídico. En ese contexto, no es jurídicamente posible acceder a la pretensión del denunciado en este recurso de inconformidad a efecto de que se declare falla alguna de la autoridad resolutora debido a la decisión adoptada, puesto que como lo señala dicha tesis, contrariamente, ello genera la obligación del juzgador de apreciar con mayor cuidado y detenimiento el dicho de los declarantes, a fin de que se determine, si faltaron a la verdad, alteraron o falsearon los hechos, sobre los que vertieron declaración. Sin embargo, ello no ocasiona la consecuencia de eximir a la autoridad resolutora de prescindir de su estudio.

En suma, la jurisprudencia indicada con el inciso b), aún cuando el tema esencial de la misma radica en el parentesco de los testigos con el oferente, se estima su aplicación por analogía, dado que no puede dejar de admitirse ningún testimonio ofrecido por las partes que satisfaga las exigencias legales. De esta manera, para que pueda negarse todo valor a sus deposiciones es menester que se demuestre que falsearon los hechos investigados.

³ Tesis aislada XVI.1o.4 L, con registro digital 196038, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Junio de 1998, página 720, Novena Época.

⁴ Jurisprudencia 2a./J. 12/97, con registro digital 199201, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Marzo de 1997, página 422, Novena Época.

Es así que, se considera que el recurrente parte de apreciaciones inexactas, al invocar como supuestos de improcedencia los puntos que señaló en la instancia primigenia.

Agravio segundo. Lo esgrimido en el segundo agravio de su demanda, deviene inoperante; se explica:

El recurrente señala la indebida valoración de los hechos y pruebas, así como la violación al debido proceso, sin indicar cuáles fueron las disposiciones que el resolutor transgredió, o en su defecto, cuáles fueron los hechos que su concepto no fueron probados.

Por el contrario, de la lectura y análisis de la redacción de su agravio segundo (páginas 9 a 111 de su demanda), se aprecia una narrativa con transcripciones que, a su decir, acontecieron en el curso del procedimiento laboral sancionador de origen, sin que se observe una confronta con lo que debió llevar a cabo el resolutor a efecto de que en esta instancia se esté en aptitud de analizar los puntos torales de sus argumentos para decidir si en la postura que sume el recurrente le asiste o no la razón, o si por el contrario, lo decidido por el órgano resolutor se encuentra apegado a Derecho.

Así, se concreta en realizar señalamientos que acontecieron en el desarrollo del procedimiento laboral sancionador, así como a repetir puntos que propuso en el agravio primero (los cuales han sido estudiados) tales como la tacha de testigos y del por qué los testimonios que en su concepto no debieron admitirse; de lo que, debe decirse que tal punto ha sido calificado. Asimismo, realiza una serie de afirmaciones dogmáticas en las que solamente refiere que el resolutor llevó a cabo requerimientos para resolver sin que fuera una circunstancia necesaria. En otros puntos, señala que se debieron hacer requerimientos en los que se solicitaran pruebas a la Coordinación de Recursos Humanos a efecto de resolver con todos los elementos.

Sin embargo, esta Junta Estatal no advierte que, en la redacción de su agravio segundo, exista una controversia clara para combatir cada una de las motivaciones que llevó a cabo el resolutor para pronunciarse sobre la litis que se fijó por las y los denunciantes, y la defensa que él asumió en la instrucción del procedimiento. Así, dentro de lo abundante de la redacción, se observa que lejos de enfocar argumentos encaminados a combatir las

consideraciones en las que el resolutor sienta su determinación, el recurrente fija puntos narrativos que solamente describen diversas etapas y fases que acontecieron dentro del procedimiento laboral sancionador.

Asimismo, debe decirse que, conforme a la Jurisprudencia XI.2o. J/27, de rubro: AGRAVIOS INOPERANTES⁵, estos resultan así, cuando en ellos nada se aduce en relación con los fundamentos esgrimidos en la sentencia recurrida, lo cual como se ha mencionado, aconteció en el presente recurso.

De igual manera, se estima aplicable en lo que interesa, la siguiente jurisprudencia I.4o.A. J/48 de rubro: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. SON INOPERANTES CUANDO LOS ARGUMENTOS EXPUESTOS POR EL QUEJOSO O EL RECURRENTE SON AMBIGUOS Y SUPERFICIALES⁶, en virtud de que, conforme a este criterio, cuando lo expuesto por la parte quejosa o el recurrente es ambiguo y superficial, en tanto que no señala ni concreta algún razonamiento para analizarse, tal pretensión resulta inatendible.

Con lo anterior apuntado, se estima lo inoperante de sus agravios.

Agravio tercero. Señala transgresión a su derecho de audiencia y acceso a la justicia. Ello porque, de manera oficiosa, la autoridad responsable solicitó información a las áreas del Instituto, sin embargo, no le notificó, lo que no le permitió hacer las manifestaciones para su defensa.

El agravio es infundado, como en seguida se expone:

Según constancias del expediente del procedimiento laboral sancionador de origen, es verdad que la autoridad resolutora requirió información a las áreas de este Instituto Electoral con el objeto de allegarse de elementos que resultaban necesarios para dirimir la controversia. Sin embargo, lo infundado de ello radica en que, tales requerimientos se llevaron a cabo en términos de lo que el artículo 92 de los Lineamientos para Atender los Casos de

⁵ Jurisprudencia Registro digital: 180410, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Octubre de 2004, página 1932, Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época.

⁶ Jurisprudencia con Registro digital: 173593, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Enero de 2007, página 2121, Novena Época

Hostigamiento y/o Acoso Laboral y Sexual, el Procedimiento de Conciliación de Conflictos Laborales, así como para la Sustanciación y Resolución del Procedimiento Laboral Sancionador y el Recurso de Inconformidad para el Personal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado De Guerrero, establece que la autoridad instructora podrá solicitar informes y documentación en términos de lo establecido en el artículo 90 de los presentes Lineamientos, para lo cual otorgará al destinatario un plazo de hasta cinco días hábiles para su cumplimiento, atendiendo al caso particular y del posible riesgo observable.

Acorde a lo anterior, es que se sostiene que la autoridad resolutora actuó de manera correcta al llevar a cabo los requerimientos pertinentes, pues sus requerimientos se encuentran sustentados en la norma aplicable.

Por lo que respecta al señalamiento de que no se le dio vista para manifestar lo que a su derecho conviniera, se considera que tal argumento es inoperante, puesto que el recurrente tenía reconocida su personalidad en el expediente en que se actuó, y por lo tanto, tenía el derecho para imponerse de los autos, lo que sin duda alguna demuestra que estaba garantizado su derecho para enterarse de todos los requerimientos formulados. Sobre este aspecto, no es dable sostener que ello le causó un perjuicio, ni mucho menos que ello fue trascendente para dictar la resolución en sentido que no fue acorde a sus intereses.

Luego, si en su carácter de denunciado tuvo el derecho de imponerse de los autos, entonces se considera que, por identidad de razón, es aplicable el criterio de la tesis aislada V.1o.17 K de rubro: AUTORIZADO PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS. CONLLEVA LA CONSECUENCIA LÓGICA Y JURÍDICA DE ESTAR SIENDO AUTORIZADO PARA OÍR NOTIFICACIONES⁷, puesto que de ellos se desprende que, la imposición de los autos conlleva al derecho de ejercer la práctica para enterarse del contenido de las constancias que integran el expediente.

⁷ Tesis Aislada V.1o.17 K, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Mayo de 1997, página 605, Tribunales Colegiados de Circuito.

De ahí que el argumento sea calificado de inoperante.

Agravio cuarto. Señala el recurrente que la autoridad responsable, vulneró en su perjuicio los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad, acceso a la justicia, debido proceso, debida diligencia, igualdad y no discriminación, y veracidad.

En su concepto, señala que lo anterior se debió a que la responsable pretendió imputarle hechos que no fueron controvertidos por las y los quejosos, sino que de manera oficiosa investigó e intentó atribuirle presuntas conductas.

El agravio es inatendible, ello en virtud de que el planteamiento respecto de la autoridad responsable realizó requerimiento de información dentro procedimiento laboral sancionador de origen, ya fue contestado, debido al planteamiento realizado en el agravio tercero.

Agravio quinto. Señala que le causa agravio la parcialidad y falta de exhaustividad con que se condujo la autoridad responsable, lo que provocó la violación del artículo 17 de la Constitución, pues emitió la resolución sin tomar en cuenta las pruebas y argumentos vertidos en su defensa.

El agravio es infundado.

Contrariamente a lo señalado, la autoridad resolutora sí tomo en cuenta el cúmulo de pruebas aportadas por las partes al momento de dictar la resolución impugnada. Según se aprecia en la resolución impugnada (fojas 1979 a 1982 del tomo II del expediente de origen), fueron admitidas diversas pruebas ofrecidas por el denunciado en el punto señalado como *pruebas de descargo*, las cuales fueron valoras en dicha resolución.

Sin embargo, debe decirse que, el hecho de ofrecer pruebas en su defensa no trae adherida la posibilidad de que todo se valore en beneficio de sus

intereses, puesto que el sentido de la resolución se encuentra bajo la circunstancia de que el impartidor de justicia valore todas las pruebas en su conjunto y decida por aquellas que generen la convicción para acreditar diversos hechos o afirmaciones señaladas por las partes.

De ahí que, en el presente caso, contrariamente a lo señalado por el recurrente, se estime que el resolutor tomó en cuenta todas las pruebas aportadas para dictar la decisión, por lo que su decisión se encuentra ajustada a Derecho. En ese sentido, sus argumentos son infundados.

Agravio sexto. Señala el recurrente que, le causa agravio la injerencia de terceras personas en la sustanciación y resolución de la denuncia presentada en su contra, y que, si bien no se encuentra circunscrita al presente medio, es fundamental para dictar una resolución apegada a los principios de certeza, independencia, imparcialidad y legalidad.

El agravio es inatendible.

Lo anterior se sostiene en virtud de que lo esgrimido en el presente punto no ataca las consideraciones de la resolución impugnada, sino que arguye un tema diverso que no tiene relación con la decisión que adoptó el resolutor, y que como él lo sostiene, dicho argumento no se encuentra circunscrito al recurso de inconformidad para atacar a la resolución.

Al respecto, cuando acontecen este tipo de argumentos, se deben declarar inoperantes, y por lo tanto, no deben atenderse, ya que atacan cuestiones que, no fueron parte de la controversia. De esta manera, se estima que, es aplicable por analogía la Jurisprudencia VI.2o. J/23 de rubro: **CONCEPTOS DE VIOLACION INOPERANTES, CUANDO ATACAN CUESTIONES QUE NO FORMARON PARTE DE LA LITIS DE PRIMERA INSTANCIA.**

Agravio séptimo. Señala que se le violó su derecho humano de presunción de inocencia, toda vez de que no se le trató como inocente hasta que se

emitiera la resolución correspondiente, mientras tanto debió de presumirse su inocencia.

Sobre ese punto señala que se le prejudgó sobre su inocencia y por lo tanto, se le menoscabó su imagen, ya que a partir del dieciséis de agosto de dos mil veintidós, la C. Diana Fajardo Zaragoza, Jefa de Área de Organización Electoral desempeñara sus funciones inherentes a dicha Jefatura desde las instalaciones que ocupa la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación posteriormente a su culminación de su Encargaduría como Coordinadora de Participación Ciudadana. Sobre ello adiciona que, la C. Diana Fajardo no fue parte del litigio, sin embargo, se determinó que ella desempeñara sus funciones desde otra área, y que ello -sostiene-, vulneró su derecho humano a la presunción de inocencia.

De igual manera, el agravio es inoperante.

Al igual que el agravio sexto, lo esgrimido en el presente punto no ataca las consideraciones de la resolución impugnada, sino que arguye un tema diverso que no tiene relación con la decisión que adoptó el resolutor.

En situación similar, se sostiene que, cuando acontecen este tipo de argumentos se deben declarar inoperantes, y por lo tanto, no deben atenderse, ya que atacan cuestiones que, no fueron parte de la controversia. También, se estima que, es aplicable por analogía la Jurisprudencia VI.2o. J/23 de rubro: **CONCEPTOS DE VIOLACION INOPERANTES, CUANDO ATACAN CUESTIONES QUE NO FORMARON PARTE DE LA LITIS DE PRIMERA INSTANCIA.**

Agravio octavo. Señala que le causa agravio la dilación por parte de la responsable para entregarle copias certificadas del expediente “que nos ocupa”, las cuales solicitó el dos de septiembre de dos mil veintidós, pero le fueron entregadas el nueve de septiembre de dos mil veintidós.

El agravio es inatendible.

Lo anterior se sostiene porque el señalamiento arguye un tema que no fue parte de la litis ni forma parte de la resolución impugnada. Por el contrario, lo señalado escapa de las consideraciones con las que el resolutor se basó para tomar la decisión cuestionada.

Por ello se estima conveniente invocar al presente agravio, la misma tesis que se ha citado en las respuestas a los agravios anteriores, así, se considera aplicable por analogía la Jurisprudencia VI.2o. J/23 de rubro: **CONCEPTOS DE VIOLACION INOPERANTES, CUANDO ATACAN CUESTIONES QUE NO FORMARON PARTE DE LA LITIS DE PRIMERA INSTANCIA.**

Agravio noveno. Señala que le causa agravio la indebida resolución que determinó la suspensión por 30 días sin goce de sueldo debido a una valoración equivocada, al no tomar en cuenta que sus hijos reciben una pensión alimenticia de su parte. De esta manera, sostiene que, la resolución combatida transgrede los derechos fundamentales de sus menores consagrados en el artículo 4 de la Constitución y los tratados internacionales relativos a los derechos fundamentales de las niñas y niños.

De igual manera, el agravio es inoperante.

Al igual que en los agravios anteriores, el recurrente demuestra la misma dinámica en lo esgrimido en este agravio, ya que se concreta a exponer temas que no son parte de la controversia, y que no son parte de las consideraciones en que se sustenta la determinación impugnada.

Lo apuntado por la recurrente, escapa de la competencia de esta Junta Estatal en el sentido de que los argumentos del recurrente abarcan una esfera con temas que afectan a su familia, sin que exista motivo alguno para que en esta instancia haya un pronunciamiento sobre dicho tema.

Lo que, en su defecto, el recurrente debió atacar con mucha claridad son los puntos sobre los que el resolutor decidió el sentido de la controversia. De ahí

que, también se estime pertinente señalar que el punto que cuestiona el recurrente está fuera de la litis en esta instancia.

Dado lo inoperante de su agravio, se estima aplicable por analogía, la Jurisprudencia VI.2o. J/23 de rubro: **CONCEPTOS DE VIOLACION INOPERANTES, CUANDO ATACAN CUESTIONES QUE NO FORMARON PARTE DE LA LITIS DE PRIMERA INSTANCIA.**

3. DETERMINACIÓN

En razón de que los agravios esgrimidos en los dos recursos de inconformidad, han sido desestimados al declararse infundados en una parte e inoperantes en otra, lo procedente conforme a Derecho es confirmar la resolución recurrida.

4. DESICIÓN

Con apoyo, en los numerales 145 y 147 de los Lineamientos para Atender los Casos de Hostigamiento y/o Acoso Laboral y Sexual, el Procedimiento de Conciliación de Conflictos Laborales, así como para la Sustanciación y Resolución del Procedimiento Laboral Sancionador y el Recurso de Inconformidad para el Personal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, se:

RESUELVE

PRIMERO. Es infundado el recurso de inconformidad suscrito por los CC. Nehemías García Hernández, Ma. Bertha Pérez Torres, y Zeltzin Cantorán González.

SEGUNDO. Por las razones expuestas en el apartado IV de las consideraciones de esta resolución, se sobresee en el recurso de inconformidad presentado por cuanto hace a los CC. Aldo González Zurita y Marcelo Castro Montesinos.

TERCERO. Es infundado el recurso de inconformidad promovido por el C. Jaime Flores Pérez.

CUARTO. Se confirma la resolución de veintiséis de agosto de dos mil veintidós, recaída en el expediente IEPC/DGJyC/PLS/001/2022 y Acumulados relativo al Procedimiento Laboral Sancionador.

NOTIFÍQUESE con copia certificada de la presente resolución, a las partes y autoridades correspondientes, y en su oportunidad devuélvanse los autos a su lugar de origen, y archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Así lo resolvieron y firman, las y los integrantes de la Junta Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero.

**C. LUZ FABIOLA MATILDES GAMA
CONSEJERA PRESIDENTA Y
PRESIDENTA DE LA JUNTA ESTATAL**

**C. PEDRO PABLO MARTÍNEZ ORTIZ
SECRETARIO EJECUTIVO Y
SECRETARIO GENERAL DE LA JUNTA
ESTATAL**

**C. VICENTA MOLINA REVUELTA
CONSEJERA PRESIDENTA DE LA
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

**C. DANIEL PRECIADO TEMIQUEL
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE
CONSULTORÍA**

**C. ALBERTO GRANDA VILLALBA

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE
EDUCACIÓN CÍVICA Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA**

**C. MARÍA DEL ROCÍO SÁNCHEZ
SÁNCHEZ
DIRECTORA EJECUTIVA DE
PRERROGATIVAS Y ORGANIZACIÓN
ELECTORAL**

**C. CARLOS ALBERTO ROBLES
ESCOBAR**
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE
INFORMÁTICA Y SISTEMAS

C. ALEJANDRA SANDOVAL CATALÁN
DIRECTORA EJECUTIVA DE
ADMINISTRACIÓN

**CONTRALORÍA INTERNA DEL IEPC
GUERRERO (VACANTE)**